



Modificaciones y resistencias

Desde el primer día de febrero del corriente 1968, rige un nuevo Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial para la Capital Federal y el orden nacional.

Varias consecuencias trae aparejada la vigencia de la ley 17.454. En primer lugar, se cumple un viejo anhelo, en demasía postergado, de unificar el procedimiento existente en la Capital Federal, donde coexistían tres ordenamientos procesales. *

En segundo término, se actualizan las normas procesales para la Justicia Nacional, que la arcaica ley 50 no llegaba a conformar.

Pero quizá lo más trascendente e importante de la nueva ley que vive desde el primero de febrero, es que cambia totalmente la imagen que el hombre común, es decir la opinión de la calle, tiene acerca del proceso judicial. Pocas veces, el viejo refrán español "más vale un mal arreglo que un buen pleito", ha cobrado mayor vigencia que en la justicia de nuestro foro.

No es tarea de este comentario atribuir responsabilidades o señalar las causas de tal estado de cosas, pero sí es del caso recoger la opinión más general sobre el problema. De parte de los jueces,

además del cúmulo ingente de tareas, magros presupuestos y falta de locales adecuados, se aducía la imposibilidad de impulsar de oficio el proceso, excesivamente dispositivo, es decir que solamente a instancia de parte podían cumplirse determinadas medidas procesales.

De parte de los profesionales, se ha hecho casi una obligación —

* La ley 50 para la Justicia Federal; la ley 11.924 para la Justicia de Paz; y el Código de Procedimientos para la Justicia Ordinaria, el cual había sido modificado por numerosas leyes, pero principalmente por la 4.128, la 14.237 y el decreto ley 23.398/56.

por exigencias de los clientes— utilizar los recursos procesales como manera de conseguir el plazo negado en la tramitación extrajudicial para el cumplimiento de las obligaciones. En una palabra, el abogado estaba obligado a "chicanear" pues el cliente sabía que se podía "chicanear". No hablemos de quienes con notoria inconducta se convertían en verdaderos litigantes maliciosos, temerarios y perniciosos, para una recta y eficaz administración de justicia, la única valla opuesta al despotismo y a la arbitrariedad.

En conclusión se pedía para el nuevo ordenamiento, unidad de disposiciones, mayor intervención de los jueces para la conducción de los juicios evitando las "habilidades" de los litigantes, represión de los casos de inconducta procesal y, por sobre todo, lograr una mayor celeridad en la tramitación de las causas mediante la supresión de formalidades innecesarias o reduciéndolas a lo indispensable.

Todo ello ha sido logrado por la ley sancionada. En mayor o menor medida el intento está logrado y traerá, lógicamente, el cambio de imagen a que aludiéramos al principio. Los abogados ya no recibirán más pedidos de obtención de plazos para el cumplimiento de las obligaciones, mediante argucias procesales. Los litigantes deben saber ya que no podrán en lo sucesivo desconocer impunemente su propia firma estampada en los documentos cambiarios, para paralizar así la llamada vía ejecutiva y ordinarizar el juicio, lo que implica la postergación en el tiempo de toda medida precautoria (embargo, etc.) contra el deudor.

DESCONCERTANTE RESISTENCIA

Todo esto no debería sino haber sido recibido con general beneplácito por todos y exaltado por las propias organizaciones profesionales. Pero he aquí que ha acontecido todo lo contrario. Se ha desatado un cúmulo de críti-

cas al Código sancionado desde todos los ángulos posibles. Podría pensarse que las objeciones obedecerían a imperfecciones de técnica, o a planteos doctrinarios, o a incongruencias de conceptos o lenguaje, que las tiene y muchas, como toda obra humana que será siempre imperfecta, pero perfectible. Lamentablemente otra ha sido la tónica de los argumentos esgrimidos por las organizaciones profesionales para oponerse a la puesta en marcha el primero de febrero del Código recientemente sancionado.

Se reducen a dos los artículos objetados y por su trascendencia para el hombre común y para la imagen que el mismo se va a formar de nuestra administración de justicia, no podemos menos que analizarlos con detenimiento y extraer las conclusiones que tales actitudes permiten suponer.

En el Capítulo VI al tratar los deberes de los jueces, el artículo 34 inciso 6º, los obliga a "declarar, en oportunidad de dictar sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes". Nadie mejor que ellos para juzgar las conductas de los litigantes y profesionales actuantes, con las garantías que supone el poder apelar ante las Cámaras o la Corte Suprema, en su caso, cuando se creyere violada la disposición constitucional de la garantía de la defensa en juicio. Pero resulta incomprensible que bajo el pretendido interés de salvaguardar los fueros forenses, quieran sustraerse a las normas tendientes a procurar la moralización en la tramitación de las causas, justamente quienes por su ministerio más obligados están a colaborar con tal consecución de fines.

Al profesional probo y responsable de su actuación, qué temor puede inspirarle tal facultad en manos de un magistrado, con la necesaria garantía de revisión que todo pronunciamiento judicial entraña.

Complemento de la anterior norma es la del artículo 45, que establece en el caso de haberse de-

clarado maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el Juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante, o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Fundamentalmente cree verse en esta norma una cortapisa al derecho de defensa. Nada más alejado de la realidad, porque mediando buena fe, nadie podrá nunca sentirse menoscabado o perturbado en su derecho de defensa, bajo un supuesto temor a la sanción que el artículo señala. Con el mismo criterio nadie pediría una medida precautoria, aduciendo que la caución exigida para su procedencia, fuera una valla para el ejercicio de sus derechos.

CAMPANA SIN BADAJO

Actitudes del tipo de las señaladas no contribuyen a perfeccionar nuestras instituciones. Mucho se ha hablado de la inconveniencia de encarar reformas a los códigos, no existiendo el Parlamento. Pero es del caso preguntarse si cuando existía el Parlamento, la vetustez de nuestras leyes no obedecía a la resistencia que toda innovación o reforma crea en los sectores aferrados a los viejos moldes y estructuras. A veces quienes más creemos y alabamos el sistema parlamentario, buscamos para la renovación de la legislación de fondo y leyes procesales, la coyuntura que presenta el receso obligado del Congreso, que posibilita la cristalización legislativa de alguno de los muchos proyectos que todos los sectores elaboran, pero que llegado el momento, no se preocupan en llevar a su sanción. Concretando, si las críticas al Código se reducen a resistir las sanciones que establece para quienes quebranten la moralidad y buen orden del proceso, sólo me resta recordarles las palabras de Carlos Binding, aquel maestro del Derecho Penal: "ley sin pena es campana sin badajo". □

Dr. Carlos Gregorio Fraga

Trasplante de corazón

El doctor Jorge Antonio Bargo, reconocido cirujano, estudioso de los problemas de trasplante de hígado, nos ofrece, tal como lo señala el título una opinión más sobre el tema, revelándonos la existencia de científicos que están trabajando sobre experiencias exitosas que se mantienen aún en silencio.

UNA OPINION MAS

I. LA VIDA PRESTADA

Vivimos un siglo de maravillas tecnológicas. Está próxima a lograrse una de ellas, tan difícil como llegar a la Luna, pero más útil al hombre que sufre: se trata **del trasplante de órganos**.

Trasplantar un corazón, es un alarde de ciencia y técnica, que forma parte de un vasto programa experimental puesto en marcha hace varios años y cuyos pasos iniciales los diera Alexis Carrell, Premio Nóbel 1912, con cultivos y trasplante de tejidos.

Ya ha sido superada la etapa de experimentación animal, y sabemos que están vivos perros a los que hace cuatro años se les injertó un hígado, y otros que después de un año de efectuado el trasplante, siguen viviendo con corazón ajeno.

Pero aún no se ha superado la etapa de experimentación humana, porque resulta muy distinto injertar a un animal que a un hombre, por las siguientes razones:

- a) El animal dador y el receptor, son sanos.
- b) El animal dador es fácil encontrarlo sin esperar su muerte, y la intervención se realiza en el momento previsto, con el sacrificio del mismo en condiciones de normalidad metabólica y fisiológica.
- c) También es fácil obtener dadores hermanos del receptor para disminuir las posibilidades de rechazo por incompatibilidad tisular.

Es obvio que estas razones varían fundamentalmente, cuando se quieren aplicar al ser humano. Las experiencias en animales se han puesto a prueba en intervenciones simultáneas, cruzadas con el hombre, dando muestras de que nuestro organismo guarda pocas diferencias funcionales con el de algunas especies animales. Por ejemplo: ya se ha logrado sacar del estado de coma hepático, a pacientes cuya sangre se "dializó" a través del hígado de un cerdo, "in situ".

Los trasplantes humanos de riñón, órgano regulador del medio interno, tienen numerosos exponentes de éxito en varias partes del mundo, de las que se ha dado amplia comunicación científica, si bien la solución ideal todavía no se obtuvo, pues exige algunas condiciones que limitan las posibilidades de aplicación masiva.

La complejidad aumenta cuando se trata de órganos únicos, como el hígado y el corazón, porque suponen la muerte del dador.

A esta altura del comentario, queremos insistir con el tema de actualidad que ha conmovido la opinión mundial: el suceso quirúrgico del injerto cardíaco. Aceptamos y admiramos la hazaña en toda su dimensión médica, pues señala la iniciación de la etapa experimental humana, necesaria e inevitable para el progreso. Pero deploramos que la difusión popular se haya hecho antes que la científica, porque así puede distorsionar sus posibilidades de aplicación, ilusionando a muchos enfermos, sin que la experiencia acumulada ni la aprobación científica hayan dado aún su veredicto.

Y el problema se sensibiliza aún más, si pensamos en las implicancias de tipo ético, filosófico y religioso que pueden llegar a plantearse: cuándo se debe decidir que el paciente ha muerto, pero que su corazón puede seguir latiendo en otro organismo, ya que en la opinión del ciudadano común es en el corazón donde se asientan los afectos y los sentimientos más nobles.

II. CARACTERISTICAS

Creemos que no está de más recordar que dicho órgano tiene condiciones que lo hacen especialmente apto para el trasplante, porque:

- a) Es un músculo de prodigiosa vitalidad.
- b) Tiene automatismo (es capaz de latir aislado del organismo).
- c) Su función es mecánica (bombea la sangre).
- d) Carece de actividad metabólica.

Los esfuerzos técnicos actuales, tienden a perfeccionar un corazón artificial, electrónico, capaz de funcionar como una simple bomba aspirante-impelente, con el cual se lograrían los fines perseguidos por el reemplazo y se eliminarían los daños y las implicaciones mencionadas.

Muy distinta y mucho más laboriosa es la técnica del trasplante de hígado, también órgano único, verdadero laboratorio de funciones metabólicas, que no tiene automatismo, y cuya estructura histológica es compleja y lábil, todo lo cual elimina la posibilidad de su reemplazo por un órgano artificial.

Por todo lo expuesto queremos rendir un homenaje, al destacar con énfasis, que actualmente en Denver, Colorado (U.S.A.) están viviendo varios niños con un hígado trasplantado, uno de ellos desde hace seis meses. El silencio prudente que ha mantenido su realizador, el doctor Thomas STARZL, habla del criterio científico que lo impulsa. Y lo ha llevado a cabo en niños pequeños, seres a los que se le deben brindar las mejores posibilidades para que desarrollen su vida entera sin limitaciones físicas de ninguna naturaleza. □

Jorge Antonio Bargo